



El acuerdo del Gobierno de Bolivia con el FMI es “de alto riesgo en su etapa inicial”, dice un experto

Posted on Septiembre 13, 2026

Por Sebastián Ochoa

El presidente, Rodrigo Paz, y el Fondo Monetario Internacional (FMI) firmaron un préstamo por 1.900 millones de dólares, con la condición de que en Bolivia se ejecute un plan de ajuste para reducir los gastos del Estado. Economistas dijeron a Sputnik que se debe proteger a los hogares vulnerables.

El Gobierno de Rodrigo Paz dio a conocer los términos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.900 millones de dólares, en un plan de tres años. El presidente se comprometió a **reducir los gastos del Estado**, eliminar del todo la subvención a los combustibles, además de habilitar el comercio privado de gasolina y diésel.

Anuncios que el Ejecutivo realizó en los últimos días están contemplados en el texto, como permitir a las refinerías inactivas de Bolivia la importación de petróleo para producir diésel y gasolina. El mandatario y el organismo de crédito coincidieron en que **este ajuste podría repercutir en protestas sociales**.

El déficit fiscal de Bolivia **alcanzó el 11% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025**. Paz se

comprometió a reducirlo al 9,1% este 2026, al 6,4% en 2027 y al 2% para 2031. Otros ajustes fiscales establecen mantener los salarios del sector público.

Otro compromiso está en las Reservas Internacionales Netas (RIN), actualmente de 4.270 millones de dólares. Para fin de año **se prevé que alcancen los 5.940 millones**. Se proyecta que para 2028 llegue a los 8.000 millones y supere los 9.000 millones en 2031.

El FMI y el Gobierno boliviano indicaron que este acuerdo **puede generar confianza en otros organismos de crédito internacional**, como el Banco Mundial (BM) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros, hasta movilizar más de 5.000 millones de dólares en préstamos.

Retiro de estímulo al combustible, el tema más duro

El economista Omar Velasco compartió con Sputnik sus impresiones sobre el documento presentado por el ministerio. Contextualizó que “el Fondo tiene una forma de proceder con los países, no solo de la región, sino a nivel internacional, que es un formato muy estándar. Las medidas son siempre las mismas:

flexibilidad cambiaria, reducción del déficit fiscal, independencia del Banco Central de Bolivia (BCB), subida de tasas de interés y liberalización de los mercados, del cambiario y otros”.

Velasco señaló los principales puntos del acuerdo: “Lo primero es la eliminación total de la subvención a los combustibles para enero de 2027. **Es el tema más duro**. Ya no es la eliminación selectiva, como ha hecho el Gobierno para el diésel, o el congelamiento para la gasolina”.

El especialista señaló que lo anterior resulta complicado debido a que ocurriría “en un contexto de debilidad institucional”, lo cual promovería una convulsión social “muy fuerte en el país”. En ese sentido, perfiló que la segunda medida más impopular se relaciona con el aumento de tasas de interés.

“Según el acuerdo, se van a eliminar los techos a las tasas reguladas. O sea: Bolivia tiene instaurados desde hace 10 años créditos focalizados en la vivienda social y el crédito productivo, cuyas tasas han estado en torno del 6% hasta el 12%. Esas tasas se van a liberalizar, van a subir. **Esto va a tener una repercusión social muy fuerte**, porque hay más de un millón de prestatarios en el país que tienen créditos de vivienda, que bajo las nuevas condiciones financieras tendrían un encarecimiento del crédito por lo menos en un 30%”, dijo.

En ese sentido, advirtió que **la consecuencia de aumentar las tasas de interés sería una contracción del sector crediticio** y el de la construcción, así como de todos los colaterales.

“La tercera medida tiene que ver con un ajuste muy fuerte al déficit fiscal. El presupuesto de 2027, según el acuerdo con el Fondo, debería incluir una reducción del déficit en un 22%. Y para 2028 se tendría que

llegar al equilibrio del balance primario". Pero "resulta que **este ajuste del 22% del déficit fiscal es un ajuste muy fuerte**, más aún cuando lo único que ha hecho el Gobierno durante estos primeros meses de gestión ha sido bajar impuestos", lo cual se tradujo en una menor recaudación.

Velasco pronosticó que "las metas de ajuste fiscal del déficit van a ser traumáticas para la población boliviana. **Le va a quitar liquidez al sistema financiero y a la economía en general**".

Finalmente, evaluó "la cotización del dólar flexible que ya se ha implementado. El problema de implementar un tipo de cambio flexible en Bolivia es que no tenemos las condiciones macroeconómicas para sostener un dólar volante, un dólar que únicamente lo define el mercado, porque **estamos en una situación todavía de escasez crónica de dólares**. La flexibilidad cambiaria va a llevarnos a una sistemática subida del dólar en 2027".

Lo bueno, lo malo y lo feo

En diálogo con Sputnik, el economista Fernando Romero compartió su análisis del documento. Resaltó aspectos positivos y negativos: "el programa ataca directamente uno de los principales problemas estructurales: **el déficit fiscal persistente y su financiamiento mediante el BCB**. El objetivo de eliminar el déficit primario y reducir el déficit global a 3,5% del PIB en 2029 puede mejorar la solvencia del Estado, disminuir las necesidades de endeudamiento y recuperar credibilidad ante acreedores e inversionistas. Desde una perspectiva financiera, **es positivo separar progresivamente la política fiscal de la emisión monetaria**".

Para el experto, el acuerdo abre mejores condiciones para la inversión privada, ya que "la revisión de los marcos regulatorios de hidrocarburos y minería, la eliminación gradual de restricciones a exportaciones, el fortalecimiento de los derechos de propiedad y la mejora de la gobernanza pueden contribuir a recuperar la inversión privada nacional y extranjera. Si estas reformas se aplican con seguridad jurídica y reglas estables, Bolivia podría recuperar capacidad productiva, exportadora y generadora de empleo formal".

Entre los aspectos negativos, resaltó que el ajuste fiscal tendrá impacto en la actividad económica: "el ajuste de 8,5% del PIB es considerable y se concentra inicialmente en el período de mayor debilidad económica. **La reducción del gasto público, la contención salarial y la postergación de inversiones pueden disminuir la demanda interna**, afectar a proveedores del Estado y profundizar temporalmente la recesión", dijo Romero.

Así, el experto destacó que el propio memorando reconoce que **la actividad económica continuará contrayéndose en 2026**, por lo que alcanzaría su nivel mínimo en 2027. Se prevé que la situación nacional recién salga a flote en 2028.

Romero también observó que “la transición cambiaria y la eliminación de subsidios pueden elevar costos de transporte, producción y distribución, trasladándose posteriormente a alimentos y otros bienes. El propio programa reconoce que **el reajuste de precios relativos puede retrasar la desinflación y generar riesgos sociales importantes**. Por eso resulta especialmente delicado pasar de una inflación proyectada de 14% en 2026 a una inflación de un dígito en 2028”, como detalla el documento.

Para el economista “el principal riesgo macroeconómico es que Bolivia enfrente simultáneamente **una reducción del gasto, menor inversión pública, crédito más caro, depreciación cambiaria y mayores costos energéticos**. Esto puede producir una combinación de recesión, inflación y deterioro del empleo, especialmente durante 2026 y 2027”.

A la vez, “la eliminación de subsidios y controles de precios puede **generar conflictos sociales** si la compensación no llega oportunamente a los hogares vulnerables. El riesgo es que un problema económico se convierta simultáneamente en un problema financiero y social”.

Ante este contexto, Romero consideró que “no se debe ejecutar el ajuste como un recorte lineal del gasto, sino **como una reingeniería del gasto público**. El Estado debe eliminar primero el gasto improductivo, las duplicidades, los privilegios, los proyectos de baja rentabilidad económica y las empresas públicas estructuralmente deficitarias, protegiendo la infraestructura crítica, la salud, la educación, la alimentación y los programas de generación de empleo”.

Para el economista, este acuerdo con el FMI “representa **un programa de estabilización profundo y necesario**, pero de alto riesgo en su etapa inicial. Su fortaleza está en atacar simultáneamente el déficit fiscal, el financiamiento monetario, las distorsiones cambiarias, deuda, inflación y debilidades financieras”.

Romero sostuvo que “el éxito dependerá de **proteger efectivamente a los hogares vulnerables y evitar que el ajuste se convierta en una recesión prolongada**. Si las reformas logran estabilizar las cuentas públicas, recuperar reservas, atraer inversión y elevar la productividad, Bolivia puede salir fortalecida estructuralmente”.